

INTERPONGO RECURSO DE CASACION

EXCMA. CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN- SALA I

Autos: "SATELITAL WORLD S.R.L. S/ QUIEBRA DECLARADA S/ INCIDENTE DE REVISION" - Expte. N°: 151/14-I8

MARIA DE LOURDES CACERES, abogada representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva (AFIP-DGI), constituyendo domicilio a los efectos legales en casillero digital en C.U.I.T. 27-27751611-5, a V.E. me presento y respetuosamente digo:

I- OBJETO

Que siguiendo expresas instrucciones de mi instituyente, vengo en legal tiempo y forma a deducir RECURSO DE CASACION (Art. 748 del C.P.C.C. de la Provincia) en contra de la resolución dictada por vuestra Excelentísima Cámara Civil y Comercial Común Sala I en fecha 26 de noviembre de 2020, notificada en Casillero digital de Notificaciones el 12/02/2021, en la parte que resuelve *"I.- NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 464/465 por la Dra. Maria Lourdes Cáceres en representación de AFIP- DGI, contra la sentencia de fecha 22/04/2019 (fs. 450/457).II.- COSTAS, como se consideran.III.- HONORARIOS, oportunamente"*.

Pido desde ya que, en base a los fundamentos que informarán este recurso, V.E. haga lugar al mismo y en su mérito, revoque la sentencia recurrida.

II.- DEPÓSITO

Conforme lo exige el código de procedimiento aplicable (art. 752 C.P.C.),

adjunto boleta de depósito por la suma de \$ 25.000 (Pesos Veinticinco mil) y copia de la misma a la orden de la Excma. Corte Suprema de Justicia, Banco Macro.

Pido por lo tanto, se tenga por acreditado el mencionado recaudo procesal.

III.- PROCEDENCIA DEL RECURSO DE CASACION SU ADMISIBILIDAD.

Todos los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos 748 a 752 del C.P.C. de Tucumán concurren en el caso de autos:

En artículo 748 inciso 1) expresa que la casación procede contra sentencias definitivas dictadas por las Cámaras, equiparándose también como tales a las que, dictadas en una cuestión incidental, terminen el pleito o hagan imposible su continuación.

En el caso de autos, la sentencia emitida por la Excma. Cámara pone fin a la cuestión debatida en la incidencia promovida por AFIP, ya que resuelve no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por esta parte, rechazando por contrario sensu y con carácter definitivo el crédito cuya verificación se solicitó, impidiendo en consecuencia la continuación del proceso y vulnerando el derecho que le inviste a mi mandante como acreedor legitimado de cobrar la totalidad de su acreencia Fiscal.

Por otra parte concurre en autos la causal casatoria de la infracción a las normas de derecho, por cuanto el fallo se aparte abiertamente del procedimiento verificadorio establecido por el artículo 32 de la ley N° 24.522 y no verifica el crédito insinuado pese a que se ha demostrado acabadamente su monto, causa y privilegio. Lo cual a su vez desvirtúa las normas que rigen los tributos y su determinación (leyes de procedimiento fiscal N° 11.683, 17.250, 18.820, 21.864, RG 1566, RG 3093/11 y RG

Tal como lo expresa reconocida doctrina, la casación para cumplir en serio su misión de resguardar la observancia del principio de legalidad en las sentencias, debe controlar aún antes que el juicio de derecho, el de hecho. La aplicación del Derecho parece correcta, pero no lo es cuando se la hace en base a una decisión errónea en el plano fáctico. Y no es correcto lo que parece sino lo que es. (Gladis E. de Midon – La Casación control del “Juicio de Hecho”).

Sobre las finalidades del recurso de casación tiene dicho el Dr. Juan Carlos Hitters en su obra “Teoría de los Recursos Extraordinarios y la Casación”, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1994, en las páginas 116 y siguientes que: “Aparecen así nítidamente ante las pupilas del observador, estos dos importantes fines del instituto sub examine, es decir por un lado el control del cumplimiento del derecho objetivo, o función revisora, o nomofiláctica; y por otro la uniformidad de los fallos judiciales o función uniformadora”.

“Esta amplia evolución de las ideas fue llevando, poco a poco, al instituto “sub-examine” a su verdadero quicio, ya que controla ahora toda cuestión de derecho, aplicada a un caso particular, aunque no estuviera presente la solución en ninguna norma; cayendo, por ende, bajo la censura del tribunal casatorio todos los medios de interpretación del derecho, ejerciéndose en consecuencia un examen no sólo de la infracción expresa de la ley, sino de su falsa aplicación y de su defectuosa interpretación, y no solamente de ella sino también de la doctrina legal”.

“La nota de la “jurisdiccionalidad” es obviamente aplicable al sistema argentino; y ello debe tenerse bien en cuenta en virtud de que la primera consecuencia de esta característica, muestra la inexistencia de las preocupaciones puramente políticas que se advirtieron en Francia y en Italia, cediéndole lugar a una

necesidad más realista como es sin duda la función uniformadora de la jurisprudencia”.

“Ciertamente es que como consecuencia de lo señalado debe inferirse también que la “jurisdiccionalidad” lleva ínsita la idea de que la defensa de la ley (función nomofiláctica) debe entenderse con un criterio amplio pues el contralor no sólo tiene que apuntar a la legalidad estricta, sino al respeto del cuerpo de doctrina formado en torno a esa legalidad, esto es la doctrina legal”.

“La afirmación que venimos haciendo – quizás ya muy reiterada – de que el tribunal de casación no debe perder de vista la justicia del caso, no significa para nada que asimilemos a la queja máxima, a la tercera instancia...”

En el caso de autos, surge imperiosa la necesidad de habilitar la instancia casatoria para reestablecer la situación de derecho que fue vulnerada por los sentenciantes en grado inferior. PIDO SE TENGA PRESENTE

Por tal motivo, y en consonancia con los argumentos que más adelante explicaré, solicito que se valore correctamente todos los elementos que se reunieron en el marco del proceso sumario administrativo que dieron lugar a la aplicación de las multas objeto del presente incidente, fundamentalmente el momento en que el proceso adquirió firmeza. Asimismo, se tenga presente la documentación que se acompañó para justificar la legalidad de los procesos administrativos, mediando la correcta aplicación de la normativa tributaria que se expuso en las instancias anteriores a fin de no caer en arbitrariedad del derecho.

Por otro lado, se configura la causal del art. 750, por cuanto el fallo que se recurre altera el debido proceso establecido en la Ley Concursal, olvida que la tutela constitucional de los Arts. 16 y 17 de la Carta Magna juega para “todas” las partes en

el litigio, vulnerando el debido proceso adjetivo e introduciendo en autos interpretaciones conjeturales que desnaturalizan el procedimiento en sí, infringiendo la norma de derecho, para arribar a conclusiones que se apartan de la ley tributaria y traen aparejada la incertidumbre para los administrados al sentenciar arbitrariamente.

La sentencia que se casa, resulta evidentemente arbitraria ya que carece de suficiente fundamentación al sentenciar la inadmisibilidad del crédito del Fisco. Aun mas, se puede apreciar que durante todo el proceso no se tuvo en cuenta la normativa que ésta parte arrimó, simplemente se adhirió a conclusiones generales que no son aplicables a los casos que se discuten, resultando de ésta manera en sentencias carentes de fundamentos acordes a derecho y por ello, de una ARBITRARIEDAD MANIFIESTA.

En tal sentido, el fallo que se apela se limita a remitir a las conclusiones realizadas por el A quo, sin fundamentar la decisión de rechazar el crédito, lo cual resulta a todas luce arbitrario: “ *NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 464/465 por la Dra. Maria Lourdes Cáceres en representación de AFIP- DGI, contra la sentencia de fecha 22/04/2019 (fs. 450/457).*”.

IV.- ANTECEDENTES DEL CASO TRAIDO EN CASACION

Cumpliendo con las exigencias establecidas en el Código Procesal, se expondrán detalladamente la correlación de los hechos y puntos materia de los agravios, y la norma infringida por el resolutorio de Cámara, que causa gravámen a mi mandante.

Nos referiremos a las principales situaciones que se han sucedido en este

juicio, a los efectos de cumplir el requisito de fundamentación autónoma impuesto por el art. 751 de la ley de rito.

El día 11/04/2017 mi mandante PROMUEVE INCIDENTE DE VERIFICACIÓN DE CREDITOS (Art. 202 de la Ley 24.522) , el cual fue resuelto con fecha 22/04/2019 mediante sentencia de primera instancia la que dispone hacer lugar parcialmente al mismo, expresando: *“Tº. **HACER LUGAR** parcialmente al incidente de verificación de crédito promovido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en los términos del art. 202 de la L.C.Q., por lo considerado. En consecuencia, **DECLARAR ADMISIBLE** la suma de \$10.369.317,77, de los cuales, \$7.065.364,48 responde a capital, los que son admitidos con privilegio general (art. 246 inc. 2 y 4 L.C.Q.), y \$3.303.953,29 a intereses los que son admitidos como quirografarios (art. 248 L.C.Q.).”*

Notificado y agraviado este Organismo Recaudador de la sentencia mencionada, se interpone en tiempo y forma recurso de apelación en fecha 06/05/2019.-

Con fecha 21/05/2019, se expresaron agravios objetando lo expuesto en los párrafos anteriores. El 26/11/2019 la Excma. Cámara resuelve: *“**NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto a fs. 464/465 por la Dra. Maria Lourdes Cáceres en representación de AFIP- DGI, contra la sentencia de fecha 22/04/2019 (fs. 450/457).”*

Los considerandos del fallo expresan:

“a) La apelante cuestiona que el crédito insinuado en concepto de multas por recursos de la seguridad social haya sido declarado inadmisibile por falta de firmeza. Entiende que ello resulta erróneo, en tanto la RG 1566 prevé una aplicación automática de las sanciones allí impuestas ante el incumplimiento del contribuyente, y su parte habría acompañado la intimación respectiva que no fue recurrida por la

fallida”.

“El presente agravio no puede progresar. Es que conforme sostiene el fallo impugnado (fs. 456 vta.), si bien la RG 1566 -que rige la materia-, fija los porcentajes y formas en que debe aplicarse la multa, también es cierto que debe emitirse una resolución que la aplique, y que luego de notificada quede firme, a fin de garantizar el derecho de defensa del contribuyente. Como advierte el sentenciante, dichos extremos no fueron acreditados en autos, y los presentes agravios no logran rebatir tal conclusión, ya que se limitan mas bien a reiterar y justificar el procedimiento cuasi mecánico impuesto por la propia acreedora insinuante”.

“Si bien el régimen sancionatorio puede implementarse de manera automática, ello no significa que las verificaciones de créditos concursales puedan llevarse a cabo de igual manera; todo lo contrario”.

“Como acertadamente sostiene Sindicatura (fs. 492), cualquiera sea la naturaleza de la multa impuesta por la Administración Federal, debe garantizarse el debido derecho de defensa”.

“En este contexto, resulta útil recordar que la firmeza del crédito fiscal significa que éste deber ser exigible al tiempo de su incorporación al pasivo concursal. Por lo tanto, cuando la exigibilidad del crédito, de causa anterior a la presentación en concurso o la declaración de quiebra, resulta de un acto posterior a la misma, no cabe pronunciarse sobre su admisibilidad, hasta tanto dicha exigibilidad resulte comprobada”.

“Asimismo, es sabido que la verificación de multas concursales no escapa al esquema general de análisis de los restantes créditos concurrentes, debiendo el acreedor cumplir con los recaudos propios de la insinuación y acreditación

correspondiente, y el deudor y síndico ejercer un debido contralor. En este sentido, se ha dicho que la verificación de una sanción pecuniaria, resultará procedente en tanto se encontrare firme y para su establecimiento se hubiere garantizado el adecuado ejercicio del derecho de defensa del imputado. Ello así, en tanto “constituye una condición sine qua non que el derecho así reconocido a favor del Fisco, surja de un sumario llevado a cabo en tiempo oportuno, no bastando para su procedencia el mero labrado de un acta de infracción, y su cuantificación a los efectos de la petición de verificación”. (Cfr. Melzi- Damsky Barbosa, “Régimen Tributario de los Concursos y Quiebras”, Bs. As. La ley, 2003 p. 106). Por todo lo expuesto, el presente cuestionamiento no puede prosperar”.

“b) Misma suerte corre el agravio referido a la admisión parcial del crédito correspondiente a los Aportes y Contribuciones del período fiscal 4/2014”.

“El decisorio impugnado receptó el crédito reclamado pero por un importe menor al insinuado, teniendo en cuenta que la fallida había presentado una rectificación de la DDJJ original (fs. 350) que no fue cuestionada por la acreedora. La apelante intenta rebatir tal conclusión, bajo el argumento de que dicha presentación aún no habría sido aceptada por la Administración General por falta de cumplimiento de la RG 4066/17”.

“La objeción formulada por la recurrente nuevamente resulta desacertada. Es que la insinuante no sólo nunca impugnó las sumas consignadas en la DDJJ rectificativa, sino que tampoco se ha pronunciado al respecto a pesar del tiempo transcurrido, limitándose a señalar de manera generalizada que la deudora no habría cumplido con la RG 4066/17, sin acompañar documentación alguna en respaldo de sus dichos”.

“Al respecto, cabe recordar que “la materia imponible o previsional

autodeterminada se presume y declara como exacta hasta tanto no sea impugnada por el órgano recaudador, en ejercicio de sus potestades de verificación y fiscalización. En tal inteligencia, los saldos integrados en declaraciones juradas presentadas por el sujeto pasivo, hoy concursado, en tanto se encontraren impagos y correspondieren a períodos anteriores a la presentación en concurso o auto de falencia, importarán, en cuanto a su verificación, una suerte de “prueba preconstituida”. Empero ello no obsta a que, de haberse probado en la instancia de la verificación de crédito, diferencias en la determinación, los montos allí integrados estarán sujetos a análisis y opinión del síndico, y su adecuación de ello corresponder (Melzi, Flavia I y Damsky, María, en “Régimen Tributario de los Concursos y las Quiebras” Ed. La Ley, p. 79)“.

“Por lo expuesto, no existiendo cuestionamiento alguno por parte del Fisco a la referida DDJJ rectificativa por menor valor (fs. 350), y no resultando factible admitir la mora del Fisco en pronunciarse al respecto - dado el estado de falencia en que se encuentra el contribuyente-, el presente cuestionamiento debe ser rechazado”.

“c) Respecto a la multa por impuesto a las ganancias del año 2009, el Juez a quo dispuso que al ser de índole concursal no correspondía admitir la misma por la vía prevista por el art. 202 LCQ, ya que de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de 10/03/2016, solo podía insinuarse deuda de causa anterior a la fecha de la quiebra indirecta (10/03/2016), pero posterior a la presentación en concurso preventivo (11/02/2014)”.

“Si bien se advierte que en el fallo impugnado se desliza un error numérico al analizar el crédito aquí reclamado, ya que en donde dice año 2019 debió decir 2009, lo cierto es que, como acertadamente allí se sostuvo, la multa insinuada reviste naturaleza concursal. Ello así, en tanto la conducta sancionada (causa del crédito) es del año 2009, esto es, anterior a la fecha de presentación en concurso, por lo que la

acreedora fiscal debió solicitar su verificación en dicho proceso (concurso) y no en la quiebra posterior en los términos del art. 202 LCQ. En efecto, dicha acreencia solo puede incorporarse a la quiebra indirecta (declarada el 10/03/2016) por vía de verificación tardía (art. 56 LCQ), invocando razones fundadas que hayan impedido su insinuación tempestiva en el concurso”.

“Estas circunstancias no han sido alegadas por la recurrente, quien se limitó a reiterar que la causa de la multa era de índole concursal, sin rebatir el argumento sentencial por el cual se declaró inadmisibile la multa insinuada. En consecuencia, el agravio materia de análisis no puede prosperar”.

Así el fallo resuelve desestimar en su totalidad y sin fundamento el recurso de apelación , por lo que en legal tiempo y forma se interpone recurso de casación para que proceda esa Excma. Corte a restablecer el sistema de justicia vulnerado por el A Quo.

V.- LA SENTENCIA EN RECURSO

De lo expresado hasta aquí, se puede concluir que la sentencia en crisis adolece del vicio de arbitrariedad, al referirse con simples afirmaciones el rechazo del crédito fiscal, sin fundamentar puntualmente los motivos por los cuales llega al decisorio que se casa:

- En primer lugar, se advierte que la Excma. Cámara, respecto a las **Multas R.G. 1566**, deja de lado la naturaleza jurídica de las mismas y la normativa que las rige, limitando a emitir su rechazo por considerar que se ha vulnerado el derecho de defensa.

Sin embargo, se tiene dicho que éstas multas se aplican automáticamente ante la falta de cancelación de las obligaciones de la seguridad social. En tal sentido, corresponde reiterar que las Leyes 18.820 (art. 11) y 21.864 (art. 11) no preve una vista

previa al contribuyente infractor, sin perjuicio de que el mismo puede interponer recurso una vez notificado de las mismas, lo cual no ocurrió en el caso. El artículo 11 de la ley N° 21.864 establece:

“ARTICULO 11 - Contra las intimaciones administrativas de ingreso del monto de la actualización o intereses, podrá formularse impugnación o disconformidad administrativa dentro del plazo de cinco (5) días de practicada la intimación, la que se resolverá sin sustanciación si el reclamo se refiere únicamente a la operación de liquidación de dicho monto o pretendiere la declaración de inconstitucionalidad de la normativa al efecto aplicada. Cuando la impugnación o disconformidad comprendiere también la procedencia total o parcial de la obligación o multa, serán aplicables las disposiciones que hacen a esta última materia, inclusive en lo que concierne a la actualización e intereses correspondientes”.

Éstas multas derivan de la mora en el pago de Aportes y Contribuciones, no requiriéndose una conducta de carácter doloso. Es decir se aplican por el hecho de verificarse que el Contribuyente no ha cancelado el saldo de las declaraciones juradas dentro del vencimiento general de las obligaciones. En tal sentido, los Arts. 8 y 9 de la mencionada R.G., a saber:

“ARTÍCULO 8º.- Infracción establecida en el Artículo 15, punto 1, inciso c) de la Ley N° 17.250 y sus modificaciones (1.1.): a) Mora de hasta DIEZ (10) días posteriores al plazo de vencimiento general: DIEZ CENTÉSIMOS POR CIENTO (0,10%) del total omitido, por cada día de mora. b) Mora de entre ONCE (11) y TREINTA (30) días posteriores al plazo de vencimiento general: CINCO POR CIENTO (5%) del total omitido”.

“c) Mora de entre TREINTA Y UNO (31) y SESENTA (60) días posteriores al plazo de vencimiento general: DIEZ POR CIENTO (10%) del total omitido”.

“d) Mora de entre SESENTA Y UNO (61) y NOVENTA (90) días posteriores al plazo de vencimiento general: VEINTE POR CIENTO (20%) del total omitido”.

“e) Mora de más de NOVENTA (90) días posteriores al plazo de vencimiento general: TREINTA POR CIENTO (30%) del total omitido.”

“ ARTÍCULO 9º.- Se reducirán las multas indicadas en cada uno de los incisos del artículo anterior, cuando: a) El ingreso se produzca con posterioridad al plazo de vencimiento general, pero: 1. Antes de que esta Administración Federal notifique al deudor la intimación de pago de los aportes y contribuciones adeudados: a un quinto de su valor. 2. Dentro del plazo fijado en la intimación que efectúe esta Administración Federal: a un tercio de su valor. b) El contribuyente y/o responsable que haya impugnado el acta de inspección o de intimación de la deuda, según corresponda, si: 1. Desiste del recurso y regulariza la situación con anterioridad al dictado de la primera resolución (7.1.): a la mitad de su valor. 2. Consiente en forma expresa la primera resolución (7.1.), dentro del plazo de DIEZ (10) días contados a partir de la notificación de dicha resolución, y regulariza la situación: al SETENTA POR CIENTO (70%) de su valor.”

Al momento de la presentación del presente Concurso, se verificó en los Sistemas de ésta AFIP, que la Concursada no había dado cumplimiento a la cancelación de los saldos de las declaraciones juradas, dentro del vencimiento general. Tal hecho constituye una infracción pasible de la sanción prevista en el Art 8 de la Resolución general N° 1566 (Texto sustituido en 2010 y sus modificaciones) y las reducciones previstas en el art. 9 de la misma Resolución. PIDO SE TENGA PRESENTE.

Tal como se aclaró en el incidente de revisión incoado por mi mandante y al momento de expresar agravios, las multas reclamadas se encuentran correctamente acreditadas ya que se aportaron todas las constancias posibles de donde surge clara la exigibilidad y firmeza de las mismas.

Reitero, son sanciones que se encuentran regidas por la resolución General 1566/2003 por lo que **no siguen la misma suerte de las multas aplicadas por art. 70 y ss. de la ley 11.683.** Es decir, tal como lo determina la R.G. mencionada, ante la mora en el pago de los aportes o contribuciones corresponde aplicar la sanción correspondiente.

Al haber operado el vencimiento que tenía el contribuyente deudor para interponer los recursos correspondientes para impugnar las sanciones aplicadas, las mismas se encuentran firmes y en condiciones de ser verificadas en el presente proceso concursal.

No obstante todo lo abrado conforme a derecho, resulta contrario a los hechos argumentar que no se respetó el derecho de defensa de la Concursada, pues las multas fueron intimadas a la fallida. En tal sentido, se aportaron las intimaciones correspondientes y la notificación de las mismas realizada el día 15/11/2016. El fallo resulta a arbitrario en grado sumo al sostener que las multas no se encontraban firmes y denegar por ende su verificación.

Corresponde reiterar que en la intimación practicada se comunicó al contribuyente tenía la posibilidad de impugnar las sanciones aplicadas, interponiéndose los recursos previstos en el art. 11 de la Ley N° 18.820 y art. 11 de la Ley N° 21.864 dentro de los plazos previstos indicados en los mismos (15 y 5 días respectivamente) situación esta que no sucedió. PIDO SE TENGA PRESENTE

Entre la documentación aportada, se adjuntaron las intimaciones realizadas a la firma concursada en la cual se comunica que de las constancias obrantes en esta Administración Federal, surge que no se ha dado cumplimiento a la cancelación del saldo de la declaración jurada (autodeclarada) dentro del vencimiento general, hecho que constituye una infracción que le hace pasible de la

sanción prevista en el art. 8 de la Resolución General N° 1566, texto sustituido en 2010 y modificaciones.

- En cuanto, al crédito de **Aportes y Contribuciones de la seguridad social del P.F.: 04/2014** estamos ante otro caso de arbitrariedad de la sentencia. Pues, no obstante, tener conocimiento de la normativa que se aplica para el caso de las declaraciones juradas rectificativas por montos menores a los declarados en las DD.JJ. ORIGINALES, las primeras instancias la dejaron de lado al momento de resolver.

Nunca se analizó en las instancias anteriores que:

La fallida realiza una presentación rectificativa en menos. Al respecto, la Ley tributaria se refiere en su Art 13 a las declaraciones juradas rectificativas por monto menor, y en tal sentido tiene dicho que : “La declaración jurada está sujeta a verificación administrativa y, sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, hace responsable al declarante por el gravamen que en ella se base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo o errores materiales cometidos en la declaración misma. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad”.

Respecto al caso que se discute, se advierte que la DD.JJ. Rectificativa 1, reduce los saldos exteriorizados en su DD.JJ. Original, por lo que no ingresa en los sistemas de esta AFIP, **quedando pendiente de aceptación conforme lo establece la R.G. 3093/2011, ya que no se trataba de un error material.** Esto significa que AFIP debe iniciar un proceso de investigación para determinar si los montos declarados en la declaración rectificativa son los correctos y así aceptar la misma. PIDO SE

TENGA PRESENTE.

Para que tenga lugar el procedimiento anteriormente mencionado, es necesario que el contribuyente cumpla ciertos requisitos. Se verificó que a la fecha de la declaración de la quiebra, no se registraba el cumplimiento de los requisitos establecidos en la mencionada R.G., por lo que esta AFIP considera firme la presentación original. **“Artículo 2 Texto vigente según RG AFIP N° 4066/2017:** *Dichos sujetos deberán presentar -dentro de los DOCE (12) meses posteriores al envío, por transferencia electrónica de datos, de las declaraciones juradas rectificativas aludidas en el artículo anterior- una nota en los términos de la Resolución General N° 1.128, fundamentando las razones que dieron origen a las mismas y solicitando la convalidación de los saldos a favor que resulten de dicha presentación. Asimismo, deberán acompañar las constancias documentales respaldatorias de los hechos alegados y ofrecer, en su caso, las restantes medidas probatorias que hagan a su derecho. El incumplimiento a lo indicado en este artículo obstará a la convalidación y disponibilidad del saldo en cuestión”*

Es decir que, la DECLARACION JURADA PRESENTADA POR UN MONTO MENOR, aún no se encuentra aceptada por ésta Administración, por falta de cumplimiento de la RG 4066/17, por lo tanto corresponde proseguir el cobro de los montos declarados en la DD.JJ. ORIGINAL conforme la normativa citada precedentemente.

Resulta totalmente contrario a derecho que el auto sustente el rechazo del crédito en la falta de pronunciamiento del Fisco, cuando de acuerdo al sistema auto declarativo que reconoce el propio decisorio es el contribuyente quien presenta su declaración jurada y aporta la documentación correspondiente, y con mayor razón si pretende disminuir lo inicialmente declarado. Esto contraviene expresamente lo dispuesto por el artículo 3 de la RG 3093:

“Art. 3º - Las declaraciones juradas rectificativas a que se refieren los

artículos anteriores, producirán efectos una vez que este Organismo convalide el saldo a favor del contribuyente que resulte de las mismas”.

Por otra parte el considerando incurre en una burda falacia al citar la validez de las declaraciones juradas exteriorizadas por los obligados, ya que esto debió aplicarse a la primera declaración jurada presentada y no a la segunda que pretendía reducir su importe, conforme texto expreso del artículo 13 de la ley N° 11.683.

Con lo expresado hasta aquí, se advierte que ni la instancia revisora ni el fallo emitido por la Excma. Cámara ha merituado los argumentos conducentes esgrimidos por ésta representación y ha resuelto en base a consideraciones que no se aplican al caso en cuestión, determinando una sentencia arbitraria al ignorar lo dispuesto la R.G. 3093 y R.G. 4066. PIDO SE TENGA PRESENTE.

-Por último, respecto al crédito de **Multa aplicada por el periodo 2009 del Impuesto a las Ganancias** la Excma. Cámara ha expresado: *“c) Respecto a la multa por impuesto a las ganancias del año 2009, el Juez a-quo dispuso que al ser de índole concursal no correspondía admitir la misma por la vía prevista por el art. 202 LCQ, ya que de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de 10/03/2016, solo podía insinuarse deuda de causa anterior a la fecha de la quiebra indirecta (10/03/2016), pero posterior a la presentación en concurso preventivo (11/02/2014). ”*

Resulta FALSO que mi parte no haya alegado la imposibilidad de verificar su crédito en forma tempestiva conforme artículo 56 LCQ – que la sentencia pero que no aplica al supuesto de marras - respecto del crédito quirografario por Multa – Impuesto a las Ganancias 2009, aplicada en el marco del Sumario N° 355340, ya que se formuló la pertinente reserva en el expediente principal, el cual ofrecemos como prueba, decretándose el 17 de febrero de 2016: “I) Téngase presente la reserva formulada por la A.F.I.P.. A conocimiento de los interesados. II) Atento que el letrado

apoderado de la A.F.I.P., quien se ha apersonado en la incidencia Nro. 151/14-I2, se presenta con el patrocinio del letrado Pablo Alejandro Salomón, respecto del cual no se han repuestos los recaudos de ley que le son exigibles, proceda este último en el término de cinco días a reponer dichos recaudos bajo apercibimiento de no darle intervención al mismo en el carácter antes aludido. PMRB"

Es decir que, si bien se trata de periodo Concursal, el mismo se encontraba en discusión al momento de presentación del Concurso. Asimismo antes del cumplimiento del plazo bienal establecido por el Art. 56 de la Ley 24.522 esta AFIP procedió a informar la existencia del crédito a fin de resguardar su futura admisibilidad, ya que el proceso administrativo aún no había concluido.

Por tal motivo, en concordancia a las circunstancias dadas en el procedimiento sumario con los plazos acaecidos en el presente proceso falencial, es que se procedió a solicitar la verificación del crédito una vez que el mismo adquirió la firmeza y exigibilidad requerida por el Art. 32 de la Ley 24.522. Es decir, una vez que se dictó la resolución, se la notificó y se cumplió el plazo establecido para que la fallida presentara su recurso. PIDO SE TENGA PRESENTE.

En esta línea de pensamiento se ha dicho que la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de considerar hechos y pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación (L.S 188-446, 209-348, etc).

Asimismo se encuentra configurada la causal prevista en el art. 748 del C.P.C.C. atento que el punto debatido y decidido por ello de la Sala I de la Excma. Cámara Civil y Comercial, asume gravedad institucional por exceder el mero interés

de las partes, afectando la buena marcha de las instituciones y comprometiendo, tal como se expondrá seguidamente, el adecuado servicio de justicia.

Ha expresado la Jurisprudencia que “La existencia de situaciones de gravedad institucional justifica la intervención de la Corte Suprema, superando los recaudos procesales frustratorios del control institucional que le fue confiado. Por ello, debe ser desechada toda interpretación que, con base en el estricto apego a las formas procedimentales, produzca la impotencia del órgano judicial a cuya mejor y más justa labor aquéllas deben servir” (Del voto del Dr. Levene)- CSJ, Diciembre 6-1994- Reiriz, María G. y Casal, Eduardo E. s/ Recurso Extraordinario en : Alonso, Jorge F. y otros) p.177.

Sostiene la Excma. Corte Suprema de Tucumán que “el concepto de gravedad institucional, ha sido fijado como aquello que trasciende el interés de las partes en el marco del proceso, afecta el interés de la comunidad, vulnera algún principio constitucional clásico, o la buena marcha de las instituciones (in re: “Juarez Oscar” 135-167 CSJT; “Lopez Oscar” 13/02/94; Sent 723 del 21/09/99. En el caso en examen, de acuerdo a los motivos expresados por el recurrente, se desprende la invocación de derechos individuales garantizados constitucionalmente, referidos al debido proceso y defensa en juicio, que se consideran desconocidos por el Tribunal. A su vez la solución de este Órgano se sustenta en normas de semejante raigambre C.N. y Convención Internacional de los Derechos del Niño. Resulta clara entonces la confrontación de derechos individuales del imputado y de la víctima en un marco normativo sustantivo en igual nivel, cuestión que aun cuando provenga o su origen sea de índole procesal, asume connotación institucional con trascendencia sobre el sólo interés de las partes, hacia el normal desarrollo del servicio de justicia y que ocurre como condición que habilita la instancia casatoria”.

VI.- GRAVEDAD INSTITUCIONAL. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIALES. DOCTRINA LEGAL

Tal como se adelantara, se encuentra configurada la causal prevista en el art. 748 inc 2) del C.P.C.C. atento que el punto debatido y decidido por el fallo de la Sala I de la Excma. Cámara Civil y Comercial, asume gravedad institucional por exceder el mero interés de las partes, afectando la buena marcha de las instituciones y comprometiendo, tal como se expondrá seguidamente, el adecuado servicio de justicia.

En el caso de autos, surge imperiosa la necesidad de habilitar la instancia casatoria para restablecer la situación de derecho que fue vulnerada por el fallo en crisis.

La doctrina legal como institución de contralor casatorio, habilita el remedio extraordinario en los casos de infracción a una norma del derecho, lo cual se perfecciona ante una a) violación a la norma; b) interpretación errónea; y c) aplicación errónea o indebida.

En el presente caso las NORMAS INFRINGIDAS son: 1) El artículo 11 de la ley N° 18.820 y el 11 de la ley N° 21.864 que no establece una vista previa a la aplicación de multas de la ley N° 17.250 (RG 1566), sin perjuicio de presentar recurso en contra de su intimación. No obstante lo cual el auto del 26/11/2020 exige lo contrario, desconociendo las normas que rigen la relación jurídica tributaria; 2) El art. 13 de la ley N° 11.683 que no admite rectificar en menos una declaración jurada, y la RG 3093/11 que fija un procedimiento de acreditación a los fines del control y aceptación por parte del Fisco de tales reducciones en materia previsional, el cual jamás fue cumplido por el deudor, y que omite absolutamente el fallo en crisis; 3) El

artículo 56 de la ley N° 24.522 que permite verificar el crédito una vez que se encuentre firme la resolución administrativa, en este caso en concepto de multa impositiva, lo cual no es advertido por la Excma. Cámara.

Reiterada jurisprudencia se ha expedido acerca de la vigencia de las normas tributarias aún frente a un proceso concursal. Recuerda al respecto la Sala III de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común, en su sentencia N° 53 de 04/03/2008:

“El procedimiento administrativo de determinación de los tributos por parte del fisco no se encuentra alcanzado por el fuero de atracción del proceso concursal del contribuyente. Este criterio ha sido sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Dirección General Impositiva s/incidente verificación de créditos en Casa Marroquín S.R.L. s/Concurso preventivo”, 31/03/1987, Fallos 310:719). Dicho criterio fue reiterado en la causa “Fisco Nacional Argentino (Dirección General Impositiva) s/incidente de verificación de créditos en autos Cosimatti, Gregorio G. S/conc. prev.”, sentencia del 09/04/1987, Fallos 310:785). De allí que, si existía abierto un procedimiento administrativo, la concursada debió efectuar en esa sede los planteos recursivos previstos en la legislación específica (Código Tributario Provincial y Ley de Procedimientos Administrativos) o acudir a la vía judicial por ante el fuero que resultase competente (Cámara en lo Contencioso Administrativo)”.-

A su vez el Tribunal Cintero admite la verificación tardía de multas que no cuentan con resolución firme a la fecha de la verificación tempestiva: “Ello en tanto la Resolución condenatoria haya sido dictada con anterioridad a la verificación tempestiva. Caso contrario, si el acto administrativo fuere posterior a dicho evento, como en el caso de autos, su causa continuará siendo preconcursal pero deberá intentarse su reconocimiento por incidente de verificación tardía (cfr. Melzi-Damsky Garbosa, ob. cit., pág. 107)... A lo expuesto se agrega que las mismas han sido impuestas en procedimiento legal en que se dio intervención al concursado

garantizando su derecho de defensa y que finalmente las mismas se encuentran firmes, según surge de las constancias de autos (CSJN, sentencia N° 499 del 03/05/2016)".

Con la expresión "gravedad institucional" se comprende aquellas cuestiones que exceden el mero interés individual de las partes y afectan al de la comunidad, en el caso, afectación del normal desenvolvimiento de la actividad de este Organismo y la prestación del servicio público de recaudación de impuestos. Sin perjuicio de las restantes infracciones normativas denunciadas a lo largo de este exordio, se observa que la Excma. Cámara no verifica genéricamente las multas por mora en el pago de Aportes y Contribuciones, alegando vulneración del derecho de defensa, cuando en todos los casos se siguió el procedimiento previsto en la Resolución General N° 1566, y se cuenta con vía recursiva, lo cual conduce a la aberrante regla de NO VERIFICAR NINGUNA MULTA RG 1566 EN NINGÚN CONCURSO PREVENTIVO O QUIEBRA, la cual resulta impredicable.

En síntesis la sentencia del 26/11/2020 resulta arbitraria, existe gravedad institucional, e incurre en infracción a la norma de derecho, por no considerar argumentos de mi parte o desestimarlos, lo cual en definitiva se trasunta en una sentencia exorbitante, injusta, que atenta contra principios constitucionales como el debido proceso, la defensa en juicio, razonabilidad e igualdad, tutelados por los artículos 16°, 17° y 18 de la Constitución Nacional.

En virtud de todo lo expuesto, solicito a vuestra Excelentísima Corte que haga lugar al presente remedio casatorio, revocando el fallo del 26/11/2020, así como su confirmación de costas de la primera instancia e imposición de la segunda, estableciendo que la sentencia de Cámara es arbitraria, existe Gravedad Institucional y no se ajusta a derecho por cuanto:

- No realizó una correcta valoración de la prueba producida y ofrecida;

- Es arbitraria por cuanto no se analizaron los puntos de agravio ni se brindaron otras razones del rechazo del crédito, resolviendo en base a exposiciones genéricas y apartadas de las constancias de la causa;

Así lo ha establecido la Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán (sentencia N° 410 del 06/04/2017):

“No resulta arreglada a derecho la sentencia que incumple el deber de adecuada motivación, omitiendo analizar los elementos existentes en las actuaciones administrativas agregadas en autos en el marco de una verificación del crédito fiscal”. Registro: 00048177-01

Por lo expuesto debe hacerse lugar al presente recurso de casación y establecer como DOCTRINA LEGAL que resulta arbitraria, no constituye derivación razonada del derecho vigente, y genera gravedad institucional, afectando la prestación del servicio público de recaudación de impuestos, por su naturaleza indispensable para proveer las necesidades impostergables de la comunidad, la sentencia que desestima el crédito del Fisco prescindiendo de todo análisis de las pruebas ofrecidas, y que a su vez no brinda razón alguna para justificar tal rechazo, recurriendo a argumentaciones dogmáticas sin vinculación alguna con las constancias de la causa.-

VII.- MANTENIMIENTO DE LA RESERVA DEL CASO FEDERAL.-

En cumplimiento de expresos imperativos procesales mantengo en esta instancia la reserva del caso federal atento a que el fallo dictado desconoce la normativa federal invocada, resulta arbitrario y contraria las expresas garantías

constitucionales contempladas por los arts. 17, 18, 19, 31 y 33 de la Carta Magna, reitero mi reserva de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía prevista en el art. 14 de la ley 48.-

VIII- PETITORIO

Por lo expuesto a V.E. Pido:

1- Me tenga por presentado en el carácter invocado y por constituido domicilio.-

2- Tenga deducido en tiempo y forma el recurso de casación (arts. 748 y ss. del C.P.C. y C. de Tuc.) en contra de la resolución de la Sala I de Excma. Cámara Civil y Comercio de fecha 26/11/2020, notificada a mi parte el 12/02/2021.

3- Tenga por acreditado el depósito exigido por el art. 752 de la ley de rito a cuyo fin adjunto la correspondiente boleta de depósito y copia.-

4- Tenga por reservada la cuestión federal (art. 14 de la ley 48).-

5- Oportunamente dicte V.E. resolución haciendo lugar a este recurso y conforme lo prevé el art. 761 del Código procesal, declare que la Excma. Cámara ha dictado sentencia en infracción a la norma de derecho aplicable, y resuelva V.E el caso de acuerdo a la correcta doctrina legal.-

6- Acoja los argumentos vertidos y declare verificado la totalidad del crédito revisionado por mi conferente.-

Proveer de conformidad

JUSTICIA